



**Carta de Novedades doctrinales  
y jurisprudenciales**

Número 74

Semanas del 23 de septiembre  
de 2019 al 13 de octubre de 2019

Calle Santa Clara 43, Burgos  
Tlf / Fax: 947 277 804

[www.adlucemveritas.com](http://www.adlucemveritas.com)

info@adlucemveritas.com

## **1.- Doctrina de la Dirección General de Tributos (DGT):**

### **CV 0914-19 de fecha 29/04/2019:**

#### **IRPF – SEGURO – EXENCIÓN**

La consultante ha sido declarada en situación de incapacidad permanente absoluta. La empresa en la que trabajaba tenía contratado un seguro de vida temporal anual renovable que cubría la contingencia de invalidez provocada por accidente o enfermedad, así como el fallecimiento, siendo asegurada la consultante.

Tributación de la cantidad percibida: posible exención en el IRPF y calificación tributaria de la renta.

En cuanto a la calificación tributaria de la indemnización, el contrato de seguro colectivo no instrumenta compromisos por pensiones. Partiendo de esta hipótesis, la renta obtenida tendrá la calificación de rendimiento del trabajo.

Tendrán la consideración de rentas exentas las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida. La exención se extiende a las indemnizaciones por daños personales que provengan de contratos de seguro de accidentes.

A estos efectos, la Ley de Contrato de Seguro, en la sección relativa a seguro de accidentes, determina que “se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte”.

Por tanto, dado que el contrato de seguro sobre el que se consulta cubre no sólo riesgos derivados de accidentes según la definición anterior sino también derivados de enfermedad, la indemnización por incapacidad permanente que se perciba, tanto si proviene de la contingencia de enfermedad común como si proviene de un accidente, no derivaría de un seguro de accidentes y, en consecuencia, no sería aplicable la exención.



**Carta de Novedades doctrinales  
y jurisprudenciales**

Número 74

Semanas del 23 de septiembre  
de 2019 al 13 de octubre de 2019

Calle Santa Clara 43, Burgos  
Tlf / Fax: 947 277 804

[www.adlucemveritas.com](http://www.adlucemveritas.com)

info@adlucemveritas.com

**CV 0915-19 de fecha 29/04/2019:**

**IVA – INTERMEDIACIÓN – CRIPTOMONEDAS – IAE**

El consultante es una mercantil establecida en el territorio de aplicación del Impuesto que ha suscrito un contrato de intermediación, en nombre propio, con una mercantil establecida fuera de la Comunidad para comercializar el arrendamiento de servidores informáticos. Los clientes de dichos arrendamientos respecto de los que va a intermediar el consultante se encuentran establecidos tanto en Europa como en Estados Unidos y van a destinarlos a la minería de criptomonedas.

Las operaciones de minado de Bitcoins son aquellas que permiten crear nuevos bloques de los que se derivan nuevos Bitcoins y que son remunerados por el sistema con una cantidad de Bitcoins. Pues bien, la actividad de minado no conduce a una situación en la que exista una relación entre el proveedor del servicio y el destinatario del mismo y en los que la retribución abonada al prestador del servicio sea el contravalor del servicio prestado, de tal forma que en la actividad de minado no puede identificarse un destinatario o cliente efectivo de la misma, en la medida que los nuevos Bitcoins son automáticamente generados por la red.

En consecuencia, la falta de una relación directa entre el servicio prestado y la contraprestación recibida, los servicios de minado no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por tanto, puede concluirse que el desarrollo de actividades de minado de criptomonedas no es una actividad sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido y quienes la realicen no tendrían la condición de empresario o profesional a efectos de dicho impuesto.

La cesión y el arrendamiento de servidores debe calificarse como servicio prestado por vía electrónica. Se entenderán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los servicios cuando el destinatario de los mismos no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que éste se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto.

No obstante lo anterior, se establece un criterio de gravamen económico basado en la utilización o explotación efectiva de determinados servicios para los cuales las reglas de localización de servicios determinarían la no sujeción al Impuesto. A estos efectos, se han establecido una serie de presunciones en relación con la ubicación del cliente para los servicios efectuados por vía electrónica, prestados a una persona que no tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal.



**Carta de Novedades doctrinales  
y jurisprudenciales**

Número 74

Semanas del 23 de septiembre  
de 2019 al 13 de octubre de 2019

Calle Santa Clara 43, Burgos  
Tlf / Fax: 947 277 804

[www.adlucemveritas.com](http://www.adlucemveritas.com)

[info@adlucemveritas.com](mailto:info@adlucemveritas.com)

En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas, la sociedad consultante va a iniciar una actividad consistente en el arrendamiento de servidores “cloud” para minería de criptomonedas a una empresa ubicada en Uruguay. Dichos servidores se ofrecerán en arrendamiento por la consultante a terceros ubicados en Europa y Estados Unidos, por cuya prestación de servicios percibirá de estos una cuota.

La actividad de subarrendamiento de servidores cloud debe clasificarse en el grupo 859 de la sección primera de las Tarifas, “Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. (sin personal permanente)”, que comprende el arrendamiento de, entre otros bienes muebles, el de máquinas suministradoras de servicios, sin incluir los del personal que maneja dicho equipo.

No obstante, si de las estipulaciones de los contratos se desprendiese que la actividad efectivamente realizada se corresponde con una prestación de servicios de conexión a los servidores “cloud” ubicados en Uruguay, por cuyo servicio los usuarios satisfacen una cuota, dicha actividad se clasificará en el grupo 769 de la sección primera de las Tarifas, “Otros servicios de telecomunicación”, debiendo figurar dado de alta el sujeto pasivo, a efectos meramente informativos, en el epígrafe 769.9, “Otros servicios privados de telecomunicación n.c.o.p.”.

**CV 0916-19 de fecha 29/04/2019:**

**IVA – CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO**

La entidad consultante se dedica a la actividad de enseñanza exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y ha recibido aportaciones de suelo urbanizado de cuatro de sus socios en una ampliación de capital social. Este suelo se va a destinar a construir un colegio por la consultante, contratando una empresa para que efectúe la citada construcción.

Sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de la aportación del suelo al capital social, así como de los servicios prestados por la sociedad constructora a la consultante, y, en su caso, aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo.

Según la información aportada, las personas físicas que han aportado el terreno lo adquirieron previamente y procedieron y participaron con posterioridad en su urbanización, por lo que se convirtieron en empresarios y profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, en calidad de urbanizadores de terrenos, si no tuvieran ya esta condición previamente, siempre que tuvieran la intención de afectar el suelo resultante de la urbanización a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque fuera ocasionalmente.



**Carta de Novedades doctrinales  
y jurisprudenciales**

Número 74

Semanas del 23 de septiembre  
de 2019 al 13 de octubre de 2019

Calle Santa Clara 43, Burgos  
Tlf / Fax: 947 277 804

[www.adlucemveritas.com](http://www.adlucemveritas.com)

info@adlucemveritas.com

En estas circunstancias, si la urbanización se hubiera efectuado con la intención de proceder a la venta, adjudicación o cesión posterior, la aportación de los terrenos urbanizados o en curso de urbanización efectuada por las personas físicas, empresarios y profesionales a efectos del Impuesto, estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Respecto del sujeto pasivo de las ejecuciones de obra inmobiliaria, será de aplicación el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, al tratarse de ejecuciones de obras efectuadas para la construcción de una edificación que será un colegio y cuyo destinatario tiene la condición de empresario o profesional.

En consecuencia, si la consultante realiza únicamente operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, que no originan el derecho a la deducción, no estará obligado a presentar los Modelos 303 y 390.

No obstante, si la consultante es el sujeto pasivo de los servicios de construcción de los que es destinataria por aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo, vendrá obligada a presentar declaración-liquidación especial de carácter no periódico.

**CV 0944-19 de fecha 30/04/2019:**

**IMPUESTOS ESPECIALES – HIDROCARBUROS – PÉRDIDAS**

No están sujetas al impuesto las pérdidas inherentes a la naturaleza de los productos, acaecidas en régimen suspensivo durante los procesos de transporte, siempre que, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan, no excedan de los porcentajes fijados.

La consultante es titular de un depósito fiscal de hidrocarburos, y ante la posibilidad de que en la circulación interna de los productos salidos del mismo se produzcan pérdidas superiores a los porcentajes fijados reglamentariamente, se cuestiona si en tales casos el expedidor viene obligado, además de a practicar el correspondiente asiento contable, a liquidar el impuesto correspondiente a las cantidades que excedan dichos porcentajes.

Plantea así la posibilidad de que solamente proceda liquidar el impuesto si, tras realizar la anotación contable correspondiente a las pérdidas acaecidas en la circulación, se llegase a superar en el período de liquidación correspondiente la merma permitida por almacenamiento.



**Carta de Novedades doctrinales  
y jurisprudenciales**

Número 74

Semanas del 23 de septiembre  
de 2019 al 13 de octubre de 2019

Calle Santa Clara 43, Burgos  
Tlf / Fax: 947 277 804

[www.adlucemveritas.com](http://www.adlucemveritas.com)

[info@adlucemveritas.com](mailto:info@adlucemveritas.com)

En los casos de pérdidas que excedan de las resultantes de aplicar los porcentajes reglamentarios, y se pongan de manifiesto en el momento de la recepción de los productos por el destinatario, se obliga a que el depositario autorizado expedidor o el expedidor registrado practiquen la regularización.

Esa regularización consiste en la práctica de un asiento en su contabilidad por una cuantía igual a la cantidad de pérdidas que excedan de la que resultaría de aplicar el porcentaje reglamentario. Consecuentemente, los efectos que derivan de esa regularización no pueden ser otros que los de afectar luego, en el período de liquidación correspondiente, a la base del impuesto.

La duda se le plantea a la consultante al comprobar que el Reglamento solo habla de integrar en la base del impuesto la cantidad de productos perdidos que exceda de la que resulte de aplicar el porcentaje reglamentario de pérdidas, en el caso de que la pérdida se debiera a caso fortuito o fuerza mayor.

Que la norma no hable de regularización tributaria al tratar las pérdidas acaecidas en circulación interna, no puede entenderse como una exclusión de la misma, pues toda regularización en el marco de la contabilidad de existencias conduce necesariamente a una regularización tributaria. Y es que, precisamente, la exigencia de una contabilidad de existencias en el impuesto tiene por objeto principal facilitar el control y la determinación de la base correcta para la liquidación y pago de la deuda.

Y no cabe la posibilidad de imputar a los procesos de almacenamiento pérdida alguna que haya acaecido en la circulación, pues cuando el Reglamento establece las tablas de porcentajes reglamentarios de pérdidas admisibles, lo hace con estricta separación de cada proceso y distinguiendo un porcentaje aplicable a cada uno de ellos.



**Carta de Novedades doctrinales  
y jurisprudenciales**

Número 74

Semanas del 23 de septiembre  
de 2019 al 13 de octubre de 2019

Calle Santa Clara 43, Burgos  
Tlf / Fax: 947 277 804

[www.adlucemveritas.com](http://www.adlucemveritas.com)

info@adlucemveritas.com

## **2.- Sentencias de los Tribunales:**

### **Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de abril de 2019:**

#### **ISD – REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE – VIVIENDA HABITUAL**

En fecha 16 marzo 2006 fallece de Doña J estando ingresada en la clínica S de Madrid. Su única hija y heredera otorga la escritura pública de herencia presentando liquidación del impuesto ante la Administración tributaria autonómica. En dicha autoliquidación se aplicó la reducción del 95% en relación con la vivienda habitual de la causante.

La Administración practica liquidación excluyendo la reducción que se había aplicado la heredera por considerar que la vivienda sita en la CALLE000 número NUM000 del distrito de Vicálvaro en Madrid había dejado de ser la residencia habitual de la causante desde que en 1993 había fijado su domicilio fiscal en el PASEO000 número NUM001 de Alcobendas.

De acuerdo con los datos facilitados por la AEAT, Doña J tenía su domicilio fiscal, desde el año 1993, en el PASEO000 nº NUM001 de Alcobendas (Madrid), domicilio distinto al inmueble reflejado en el inventario de la herencia (CALLE000 no NUM000 de Madrid), por lo que no procede la aplicación de la citada reducción.

La parte demandante mantiene que la residencia habitual de su madre, la causante, permaneció inmutable desde que adquirió la vivienda de la CALLE000 número NUM000 en el año 1966 hasta su fallecimiento en el año 2006 si bien, dada la enfermedad neurológica padecida y la necesidad de recibir asistencia personal para la realización de cualquier acción humana independientemente de la importancia que ésta tuviera, su única hija se vio obligada a hacerse cargo de tal asistencia para lo que trasladó a su madre a su propio domicilio en Alcobendas sin que exista acción o hecho alguno de la causante, revelador de la voluntad de ésta de llevar a cabo un cambio de residencia. Simplemente, ese cambio domiciliario dio exclusiva respuesta al interés común de madre e hija que reclamaba la atención permanente a la causante de la manera menos penosa o sacrificada posible para quien la prestaba.

Parte esta Sala de que el caso que ahora se somete a su consideración no encuentra una regulación expresa en la normativa del tributo que nos ocupa. La cuestión suscitada no es otra que la de decidir si tienen o no derecho los herederos de una persona que se ha visto obligada a abandonar la vivienda de su propiedad y que constituye su domicilio familiar y habitual por motivos ajenos por completo a la voluntad, a aplicar la reducción prevista para la vivienda habitual de la persona fallecida.



**Carta de Novedades doctrinales  
y jurisprudenciales**

Número 74

Semanas del 23 de septiembre  
de 2019 al 13 de octubre de 2019

Calle Santa Clara 43, Burgos  
Tlf / Fax: 947 277 804

[www.adlucemveritas.com](http://www.adlucemveritas.com)

[info@adlucemveritas.com](mailto:info@adlucemveritas.com)

La Sala considera que debe ser positiva la respuesta que se ha de dar esta cuestión y ello porque los hechos expuestos por la demandante aparecen como razonables y habituales en las familias españolas. En efecto, la causante cuando quedó viuda permaneció viviendo en la casa familiar, incluso ella sola. Años después cayó enferma de Alzheimer teniendo graves dificultades para vivir de manera independiente y autónoma sin riesgo para su persona, por lo que su única hija decidió llevársela a su domicilio para vigilarla y atenderla, sin que ello provocara un abandono de la casa familiar que siguió siendo conservada por la hija que la acogió.

Pero la decisión del cambio de lugar de residencia no fue ni caprichoso ni, menos aún, voluntario, sino forzado por la situación neurológica de la causante. Sin embargo, concurren dos circunstancias contrarias a la pretensión deducida por la actora: por un lado, fijación del domicilio fiscal en el domicilio de su hija en 1993, ocho años antes de que la enfermedad se manifestara y de que se produjera el traslado a Alcobendas (2001) y todo ello sin realizar ningún traslado de vivienda. Y por otro, la baja en el Padrón municipal de Madrid que tuvo lugar, asimismo, en 2001. Ambas circunstancias, sobre todo la primera, podrían dar a entender que el traslado de domicilio era voluntario.

Pues bien, debemos rechazar esta conclusión. Reconoce la parte demandante que en 1993 su madre fijó el domicilio fiscal en el PASEO000 de Alcobendas. Pero lo cierto es que su domicilio real siguió siendo el de la CALLE000 de Vicálvaro en el que permaneció otros ocho años más, hasta 2001. Se ignora si en 1993 la señora Jacinta presentaba ya síntomas de la enfermedad de Alzheimer pero el hecho de que siguiera residiendo en su domicilio de Vicálvaro hacen pensar que ese cambio formal de domicilio fiscal se debió al interés común de madre e hija de que esta última atendiera las obligaciones fiscales, requerimientos, notificaciones etc. que pesaban sobre su madre. El mantenimiento en su única vivienda es revelador, desde luego, de su intención de no cambiar de residencia.

Por lo que se refiere a la baja en el padrón municipal de Madrid baste con decir que no fue una decisión voluntaria imputable a la causante dado que el 2001 doña Jacinta ya padecía la mencionada enfermedad por lo que no estaba capacitada para tomar esa decisión libre y voluntariamente.

No se podría pensar que una persona ha cambiado de domicilio por su ingreso en un hospital, en un centro penitenciario o en una residencia geriátrica por haber sido provocados tales ingresos una enfermedad grave, la comisión de un delito o la llegada a una avanzada edad. Los así ingresados siguen manteniendo su domicilio anterior, a la espera de que puedan salir de los mencionados centros. Y siendo esto así no se puede dar distinto trato al que supera la enfermedad y al que no la supera por no dar respuesta a la misma la ciencia médica. Es más, la propia causante falleció cuando se encontraba ingresada en la Clínica S, centro en el que se acoge a enfermos terminales, ignorándose el tiempo que duró el ingreso.

Por todo lo anterior, procede estimar el recurso jurisdiccional.



**Carta de Novedades doctrinales  
y jurisprudenciales**

Número 74

Semanas del 23 de septiembre  
de 2019 al 13 de octubre de 2019

Calle Santa Clara 43, Burgos  
Tlf / Fax: 947 277 804

[www.adlucemveritas.com](http://www.adlucemveritas.com)

info@adlucemveritas.com

**Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de abril de 2019:**

**RECAUDACIÓN – PAGO EN ESPECIE – BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL**

El TEAC considera que el pago en especie de la deuda tributaria es una forma de pago excepcional que solo podrá realizarse cuando sea admitido por una ley y en las condiciones reglamentarias. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, autoriza dichos pagos con bienes del Patrimonio Histórico. No obstante, corresponde a la Administración tributaria decidir sobre si acepta el pago en especie, siguiendo al efecto el procedimiento previsto.

La entidad demandante sostiene que si bien la aceptación del pago en especie es una potestad discrecional de la Administración tributaria, no se respetó el procedimiento legalmente establecido - se omitió el preceptivo informe del Ministerio de Cultura - ni se dio oportunidad de subsanación - en lo referido a los títulos de propiedad- ni la decisión está motivada, algo imprescindible cuando del ejercicio de potestades discrecionales se trata.

El informe del Ministerio de Cultura es indispensable para valorar la conveniencia para el interés público de adquirir los bienes ofrecidos. Si bien este informe no es vinculante, debe tenerse presente a la hora de tomar una decisión. Al prescindir de dicho informe, la Administración tributaria ejerce una potestad discrecional de manera arbitraria, porque no tiene presente todos los intereses públicos concurrentes y se limita a ejercer una opción por el pago de las deudas tributarias en efectivo, lo que no está permitido por la norma.

Por otra parte, mediante la diligencia final se ha podido concretar que la deuda tributaria que se pretende pagar en especie es mayoritariamente en concepto de IRPF, a excepción de retenciones por Impuesto de la Renta de No Residentes. La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas contempla la posibilidad de hacer el pago de la deuda tributaria en especie, con las condiciones que se indican. Luego respecto de la mayor parte de la deuda sí cabe el pago en especie.

En consecuencia, si bien no depende de la voluntad del interesado pagar en efectivo o en especie, la potestad de la Administración tributaria para aceptar esta forma de pago no puede ejercerse arbitrariamente, debiendo de valorar todos los intereses públicos concurrentes, y en el marco de los procedimientos legalmente establecidos, deberá tomar una decisión motivada, que deberá tomar en consideración las circunstancias concurrentes en cada caso, sin limitarse a rechazar esta forma de pago con base en una sistemática preferencia por los pagos en efectivo alegando razones de reducción del déficit público.





**Carta de Novedades doctrinales  
y jurisprudenciales**

Número 74

Semanas del 23 de septiembre  
de 2019 al 13 de octubre de 2019

Calle Santa Clara 43, Burgos  
Tlf / Fax: 947 277 804

[www.adlucemveritas.com](http://www.adlucemveritas.com)

info@adlucemveritas.com

**Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de abril de 2019:**

**IVA – DEDUCCIÓN – REQUISITOS SUBJETIVOS**

La cuestión que se plantea en la relativa a los requisitos que deben reunir las cuotas de IVA soportadas para admitir su deducibilidad fiscal por lo que la parte recurrente debe demostrar o acreditar que unos determinados gastos, a los que se asocian las cuotas de IVA soportadas, se corresponden efectivamente, con las actividades propias de la empresa en cuestión.

El obligado tributario era propietario de una serie de parcelas en suelo urbano cuya superficie representaba un 11% del total de las afectadas por el Plan. La entidad promotora del Plan Parcial era D, de la que el obligado tributario posee el 49,77% y en la declaración por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 2005 se dedujo la totalidad de lo facturado por los importes de que fueron contratados por D, principal propietaria de los terrenos afectados por el Plan Parcial.

Si bien no hay duda a juicio de este tribunal de que D es la promotora del Plan Parcial, el obligado tributario figura como destinatario de las facturas objeto de controversia y paga la totalidad de los gastos por los servicios profesionales contratados y que afectaban a éste, cuando sólo posee directamente el 11% de los terrenos.

Aunque los servicios profesionales hayan sido facturados al obligado tributario, este tribunal debe adelantar que está de acuerdo con la inspección al considerar que el verdadero destinatario de los mismos ha sido D. Como se desprende del expediente, en toda la tramitación del Plan Parcial, Don J ha actuado ante el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León en su calidad de representante de la última empresa citada, entidad promotora del mismo y propietaria además de la mayor parte de los terrenos afectos.

Pues bien, al quedar probado en el expediente que el dominio total y el control de las decisiones, así como la titularidad de los bienes corresponde al grupo familiar formado por Don J, su cónyuge y los hijos de ambos, no puede en nuestra opinión dejarse a la voluntad de quien controla las empresas (el grupo familiar), decidir a cuál de ellas imputar los ingresos o los gastos a su conveniencia.

Por otro lado, nos parece acertado considerar la distribución de los gastos de estas facturas entre los destinatarios reales de las mismas con un criterio de superficie, cuando nada se alega en sentido contrario en la reclamación, por lo que procede aceptar que al obligado tributario le correspondiera el 11% del importe de las facturas.



**Carta de Novedades doctrinales  
y jurisprudenciales**

Número 74

Semanas del 23 de septiembre  
de 2019 al 13 de octubre de 2019

Calle Santa Clara 43, Burgos  
Tlf / Fax: 947 277 804

[www.adlucemveritas.com](http://www.adlucemveritas.com)

info@adlucemveritas.com

Debemos concluir que, independientemente de su consideración como gasto en D, en ningún caso sería deducible para la entidad ahora reclamante la totalidad del gasto satisfecho, dado que, como venimos diciendo, el 89% de la superficie se refiere a activos que no son de su titularidad. El reclamante alega en este aspecto que hubo una correlación entre los ingresos y los gastos y a juicio de este tribunal la hubo, pero solo en proporción a la titularidad de la superficie del terreno.

Debemos confirmar el criterio mantenido en esa sentencia anterior dictada por esta misma Sala con relación al Impuesto de Sociedades puesto que resulta acreditado que, aunque los servicios profesionales hayan sido facturados al obligado tributario, que es el poseedor de las facturas, el verdadero destinatario de los mismos ha sido D como promotor del Plan Parcial y propietario de la mayor parte de los terrenos afectados por el referido Plan.

Procederá, pues, tal como pretende la inspección, proceder a la imputación proporcional de los gastos facturados en relación con la superficie de terrenos que integran en mencionado Plan Parcial.

**Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de abril de 2019:**

**IRPF – RESIDENCIA FISCAL**

El demandante, el 14 de junio de 2010, solicitó la devolución de las retenciones que se le habían practicado sobre los rendimientos del trabajo durante el ejercicio 2009, por considerar que dichos rendimientos estaban exentos de retención en España, por ser residente en Corea del Sur.

En concreto, fue trasladado por su empresa a Seúl por un periodo de 4 años, y empezó a trabajar el 1 de junio de 2008, según certificado de la empresa expedido el 5 de agosto de 2009. El 1 de septiembre de 2009 fue sancionado por la autoridad coreana, por haber vivido en ese país durante un largo tiempo sin cambiar de estado de residencia -concretamente desde el 28.12.2007 al 1.9.2009-, y se le impuso una multa de 7.000,000 WON ( 5.352,29 euros al cambio), que fue abonada. Se acompaña acta notarial traducida y apostillada que incorpora el documento de comunicación de la infracción cometida por el actor.

Además, el núcleo principal o base de las actividades o intereses económicos radicaba en Corea del Sur, donde había fundado una empresa el 28.12.2007 y a donde fue desplazado para dirigir la misma a partir del día 1.6.2008. Tanto su esposa como su hijo menor de edad se



**Carta de Novedades doctrinales  
y jurisprudenciales**

Número 74

Semanas del 23 de septiembre  
de 2019 al 13 de octubre de 2019

Calle Santa Clara 43, Burgos  
Tlf / Fax: 947 277 804

[www.adlucemveritas.com](http://www.adlucemveritas.com)

info@adlucemveritas.com

trasladaron a vivir a Corea, hecho que se acredita con el certificado de la escuela a la que asistía el menor desde el 1.8.2007.

Todo lo anterior muestra que el actor tuvo su residencia fiscal en Corea durante más de 183 días durante el año 2009. Por la situación geográfica del país para las autoridades coreanas es muy sencillo comprobar si una persona sale o permanece en el país pues la única vía de salida es la aérea.

Pues bien, en el presente caso, estamos ante un tema de prueba y la misma tal y como ha sido expuesta en el fundamento anterior conduce a entender que durante el ejercicio 2009 no residió más de 183 días en territorio español, sin que pueda prevalecer como mantiene el Abogado del Estado, la AEAT y el TEARC que la residencia en Corea del Sur se inició el 1.9.2009 cuando obtuvo el certificado fiscal de residente en Corea del Sur.

El actor consta que se desplazó con su familia a ese país bastante antes del inicio del ejercicio 2009 y así se deduce de los documentos aportados y de los viajes que realizó por diferentes países por los registros de entrada y salida. Además, se le impuso una sanción por no haber modificado su situación legal en Corea del Sur y su hijo efectivamente estuvo escolarizado en ese país. En el presente caso debemos tener en cuenta el elemento intencional y objetivo cual es que el actor residió en Corea del Sur desde el año 2008 de forma ininterrumpida para la realización de actividades económicas y trasladó a su familia allí constando también un contrato de arrendamiento de una vivienda en ese país.

No puede considerarse que el documento de residencia fiscal obvie la no residencia efectiva en España por más de 183 días, puesto que la presunción es iuris tantum y permite poder articular prueba a los efectos de destruir la misma. Se reconoce el derecho del actor a que sea considerado como no residente en España durante el ejercicio 2009.